

La comunicación política de la revocación de mandato: ¿en busca de ciudadanía o electorado?

Daniela Edith Castillo Rodríguez¹

Introducción

En la actualidad, muchas de las democracias representativas han sido objeto de una pérdida de credibilidad debido a que las y los gobernantes emanados del voto popular ya no cuentan con niveles óptimos de confianza ciudadana. Si bien es cierto que este modelo de representación permite una comunicación formal e institucional, su momento álgido se delimita a la jornada electoral. Es decir, a procesos que encasillan la participación ciudadana sobre los asuntos públicos a un ejercicio que se efectúa cada determinado periodo de tiempo: una práctica que ha mostrado indicios de no ser suficiente.

Asimismo, algunos factores que tampoco abonan al fortalecimiento de la confianza ciudadana en los instrumentos democráticos tienen que ver con la falta de credibilidad en los partidos políticos como vía para elegir a los representantes populares, la corrupción e impunidad en los que se han visto involucrados; e incluso, la falta de desarrollo económico en la población. Razones por la cual se ha indagado sobre los dispositivos que permitan mejorar la situación de la democracia.

Este texto pone sobre la mesa el análisis sobre la comunicación política de dos mecanismos desarrollados durante el gobierno de la Cuarta Transformación (4T): la consulta popular para enjuiciar a los ex presidentes y la revocación de mandato. Fueron dos mecanismos polémicos que bajo el ideal de “fortalecer la democracia participativa” se llevaron a cabo en medio de discursos polarizantes, críticas y recortes presupuestales. El artículo busca indagar, a través de la comunicación política, si estos proyectos sirvieron para fortalecer el ADN democrático.

¹ Doctora en Ciencias Sociales por la UAM Xochimilco, Maestra en Estudios Sociales (Procesos Políticos) y Licenciada en Ciencia Política por la UAM Iztapalapa. Actualmente es investigadora PRONAI del CONACYT. Correo: danielaedith.casro@gmail.com
ORCID: 0000-0002-7234-2232

De esta manera, el documento está dividido en tres secciones. En el primero se desarrolla la transición de la democracia representativa a la participativa, a partir de las propuestas de diversos exponentes teóricos. Durante el segundo, se busca dar respuesta a la pregunta ¿son los mecanismos de participación ciudadana importantes para México? donde se indaga sobre las percepciones que tienen los individuos de la sociedad respecto a organizaciones e instituciones y con ello obtener una respuesta.

Ya en el tercer apartado ahonda sobre el modelo de comunicación política implementado en uno de los mecanismos de participación más polémicos de la cuarta transformación: la revocación de mandato que tuvo lugar en abril de 2022. De ella, se analiza la propuesta implementada por el INE, el papel del presidente y MORENA ante su difusión.

Finalmente, en el apartado de conclusiones se habla sobre los alcances y limitaciones que mostró el modelo implementado en este primer ejercicio de revocación de mandato y el efecto que tuvo en la participación ciudadana.

1. De la democracia representativa a la participativa

Siendo los regímenes democráticos el espacio donde se produce la ciudadanía, se debe asentar que este modelo de gobierno ha transitado por distintas vertientes de acuerdo a las necesidades y desafíos que sus integrantes presentan. De este modo y en aras de una mayor eficacia en el gobierno es que se presentó a la democracia representativa – procedimental como la opción viable en el contexto de los grandes Estado-Nación.

Ésta, tiene una finalidad específica: el determinar el proceso de toma de decisión a partir de un conjunto de reglas establecidas; es decir el proceso decisonal como procedimiento en el que se es representante o se es representado o representada.

Uno de los sustentos teóricos de esta corriente es posible encontrarla con Norberto Bobbio (1985) donde sugiere una concepción mínima de la democracia, en la que a través de instituciones y procedimientos se pueda asegurar la libertad de los individuos. Se considera que el régimen debe garantizar el sufragio universal de los adultos, los derechos civiles como la libertad de opinión, de organización y acceso a la información y establece que la toma de decisiones será por medio de una mayoría numérica, pero en la que se garanticen los derechos de las minorías.

En esa misma tónica, Robert Dahl (1991) considera una serie de elementos necesarios para la existencia y desarrollo de lo que él denomina una *Poliarquía*. En esta obra, el autor entiende por democracia o poliarquía a aquel desarrollo político en el cual los actores de las élites -en el escenario político- ejecutan conductas, actitudes y resuelven conflictos manteniendo una organización social, política y psicológica en la que la democracia es el único medio legal e institucionalizado para los comportamientos políticos y cambios bruscos o radicales en la actitud política, así como el resolver los conflictos mediante una normatividad institucional.

Así, las condiciones para que se dé una poliarquía son: 1) Autoridades públicas electas, 2) Elecciones libres y limpias, 3) Sufragio universal, 4) Derecho a competir por los cargos públicos, 5) Libertad de expresión, 6) Información alternativa y 7) Libertad de asociación; condiciones que garantizan una efectiva democracia representativa (Dahl, 2007:77-92).

Estas características buscaron ser implementadas en los Estados-Nación que mantenían un régimen democrático. No obstante, algunas naciones de Europa occidental experimentaron crisis de gobernabilidad y de legitimidad durante la década de los sesenta y setenta; al mismo tiempo América Latina experimentaba el sometimiento a regímenes dictatoriales. Incluso durante las dos décadas posteriores que la región latinoamericana implementó un orden político sustentado en democracias representativas, la ciudadanía dejó entrever el descontento hacia el modelo.

De ahí, que las críticas a la democracia representativa salieran a flote, la más contundente fue la realizada por Joseph Schumpetter (1984), a través de la teoría de élites donde reconoce que: *el método democrático es aquel sistema institucional para llegar a las decisiones políticas, en el que los individuos adquieren el poder de decidir por medio de una lucha de competencia por el voto del pueblo* (Schumpetter, 1984: 36). De modo que el poder del ciudadano se restringe al ejercicio del voto; ciñendo el gobierno del pueblo al gobierno de élites políticas.

De ahí, la tendencia a buscar un modelo democrático donde la ciudadanía pudiera participar activamente en la toma de decisiones políticas, así como poseer cierto control sobre los propios representantes. Así, la idea central de la democracia participativa consiste en que

la sociedad tenga el poder de influir o participar directamente en la toma de decisiones políticas o en la agenda pública de los gobiernos (Castro y Gaona, 2010:24).

Al respecto, es posible encontrar las aportaciones de C.B. Macpherson y Carol Patterman, quienes apuestan por la democratización de las instituciones políticas. Afirman que la participación directa y el control sobre escenarios inmediatos aunado a la competencia entre partidos políticos y grupos de interés es la forma más realista de avanzar en la construcción democrática. Para ello, recomiendan la participación ciudadana en la vida cotidiana a partir del nivel local.

Otra aportación sobre la democracia participativa es la desarrollada por Jürgen Habermas en el año 2000, quien destaca el ejercicio de deliberación *como la capacidad de la sociedad para incidir en la toma de decisiones públicas [...] y en los espacios en donde se pueda operacionalizar este tipo de democracia*. Esta perspectiva supone una nueva forma de interacción comunicativa entre los actores, de modo que [...] *deliberación, espacios públicos y participación social o ciudadana son las categorías clave de esta orientación teórica* (Habermas: 2000).

En suma, el objetivo de incorporar mecanismos de democracia directa tiene como finalidad el revitalizar el compromiso hacia el sistema del que la ciudadanía forma parte. Esta participación se puede dar por medio de iniciativas ciudadanas, consultas populares, audiencias públicas, presupuestos participativos, referéndum, plebiscitos o revocaciones de mandato, entre otras.

Ahora bien, hay que aclarar que democracia directa y participación ciudadana muchas veces se han utilizado como sinónimos durante estos tipos de análisis, pero no lo son. La democracia directa refiere a *los mecanismos consultivos –y vinculatorios en su caso- de gobierno que permite a los ciudadanos expresar de manera clara e informada, sus preferencias en torno a los asuntos que regulan su vida cotidiana* (Alarcón, 2014:212). Por su parte, se entiende por participación ciudadana a *toda intervención de los particulares en actividades públicas en tanto portadores de intereses sociales* (Baño, 1998:15).

Así, en el ideal de los mecanismos de democracia directa aunque se parte de la premisa que a mayor participación ciudadana, mayor fortalecimiento de la democracia, no hay que perder de vista la reflexión que aporta Yanina Welp al respecto:

“los mecanismos de participación pueden ser introducidos con intereses meramente electorales o para responder a crisis institucionales en

apariciencia, sin producir cambios de fondo. Sin embargo, las malas prácticas no deben ocultar que la participación es un componente fundamental de la democracia. Más aún, el buen funcionamiento y la ampliación de la participación ciudadana — del ámbito electoral a los procesos de rendición de cuentas y toma de decisiones — pueden jugar un papel destacado al mejorar el desempeño del gobierno y la satisfacción ciudadana con el sistema político.” (Welp, 2016: 98)

Lo anterior, permite observar que estos mecanismos también pueden ser objeto de intereses y pugnas políticas que bien vale la pena identificar: debates y discursos de poca calidad que propician la polarización, una promoción mediática tendiente a la manipulación en la que la problemática central se personaliza y donde los recursos son malgastados. No obstante, advierte Welp, ello no desestima ni los propios ejercicios, ni la participación ciudadana.

Es decir, pese a los intereses políticos, estos mecanismos de participación ciudadana buscan ofrecer elementos sustantivos que permitan el empoderamiento de los propios individuos. Los mecanismos de democracia directa tienen como protagonistas a la propia ciudadanía.

2. ¿Son los mecanismos de participación ciudadana importantes para México?

Alejandro Favela (2009) en su texto *Los ciudadanos y la democracia en México del siglo XXI* reflexiona sobre dos momentos que han marcado la vida política del país a través de grandes obras: *La sucesión presidencial de 1910* de Francisco I. Madero (1909) y *La democracia en México* de Pablo González Casanova (1965). El autor encuentra como convergencia, pese a la diferencia temporal: la preocupación por la democracia y la vida civil en el país; situación que a más de un siglo de distancia se mantiene presente.

Favela menciona que son innumerables los fenómenos estructurales, legales, de hecho y cultura que evidencian la falta de una vida democrática en México. Sin embargo, los procesos de modernización en el país trajeron consigo a un sujeto más activo en cuanto a su participación política y su organización. El autor apunta que es posible hablar de ciudadanía cuando los individuos trascienden su calidad jurídica como tales, es decir cuando se asumen como sujetos de derechos, obligaciones y se hacen respetar frente a las autoridades (Favela, 2009).

Precisamente, con la llegada de la alternancia electoral al poder ejecutivo, el papel y desarrollo de la ciudadanía en México ha sido objeto de estudio desde distintas disciplinas

como la ciencia política, la antropología, la sociología o la psicología social; sin embargo, los estudios que han proliferado han sido los derivados del levantamiento de encuestas para conocer y visibilizar la percepción ciudadana respecto al sistema político mexicano.

La investigación más reciente se materializa en la *Encuesta Nacional de Cultura Cívica* (ENCUCI) de 2020 que indaga sobre el involucramiento de la ciudadanía en asuntos públicos con el objetivo de generar nuevas estrategias para promover la participación. Algunos de los datos más relevantes que emanan del estudio son:

- El 55.8% de la población de 15 años y más mencionó tener mucho interés en los asuntos políticos del país. De acuerdo a esta población, los principales problemas que enfrenta la nación son corrupción, pobreza e inseguridad/delincuencia.
- El 69.2% de la población de 15 años y más está de acuerdo en un gobierno en el que todos y todas participen en la toma de decisiones. En ese sentido, hay una cifra similar de personas que consideran que la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno (65.2%). No obstante, sólo el 11.8% de la población dice estar muy satisfecha con la democracia mexicana; 52.7% si se considera las respuestas “muy satisfecho” (11.8%) y “satisfecho” (40.9%).
- De hecho, poco más del 69% de la población considera que cuenta con los conocimientos necesarios para participar en las actividades políticas que el país requiere (27.7% está muy de acuerdo y 41.5% está algo de acuerdo con la afirmación).

Por otra parte, la misma investigación refiere sobre la confianza ciudadana sobre diversos actores e instituciones que:

- Las organizaciones con mayor confianza en el país son las universidades públicas (25.9% tienen mucha confianza y 44.2% tienen algo de confianza); en contraste con los partidos políticos que son quienes menos confianza ofrecen (38.1% poco de confianza y 38.4% con nada de confianza).
- Por su parte, las instituciones mejor evaluadas son el ejército y la marina (23.4% mucha confianza y 40.4% con algo de confianza), seguida de la guardia nacional (20.9% mucha confianza y 39.6% con algo de confianza). En tercer lugar se encuentra el Instituto Nacional Electoral (18.8% mucha confianza y 40.8% algo de confianza)

y en cuarto, el poder ejecutivo (17.2% de mucha confianza y 35.3% de algo de confianza).

- Otro dato es que el mayor porcentaje de la población tiene poca confianza en instituciones como: el gobierno de su estado, de su alcaldía o municipio, los jueces, la policía, los congresistas federales y locales. Su rango de “poca confianza” oscila entre el 34 y 40%.

Ambos rubros de datos permiten afirmar que si bien la ciudadanía se encuentra cómoda con la democracia y sus instrumentos, no es igual con los partidos políticos y los representantes populares que de ella emanan. Incluso, identifican la pobreza, la corrupción y la delincuencia como resultado de los grandes problemas que el país debe enfrentar; todas asociadas a la falta de desarrollo económico.

Es decir, por más que las instituciones como el INE y el poder ejecutivo tengan evaluaciones favorables (si se contabilizan los rubros “mucha confianza” y “algo de confianza”), siguen existiendo espacios institucionales y organizativos que deben reforzarse. Por ello, no es de ninguna manera casual que en México se comenzarán a implementar mecanismos en los que la ciudadanía se pudiera involucrar de manera más activa, directa e inmediata.

De hecho, las primeras experiencias que se llevaron a cabo en México fueron a través de la organización de la sociedad civil. El primer caso se registró en 1993 donde la *Red Cívica Mx* llevó a cabo un plebiscito a la ciudadanía del otrora Distrito Federal (D.F.) y consultaba si el D.F. debía convertirse en un estado más, si debía contar con un congreso propio y si sus representantes debían ser elegidos mediante el voto popular² (Valladares, 2021: 169), pero con un dato importante: este ejercicio se llevó a cabo sin una ley que lo respaldara. De hecho, fue hasta 1995 que se aprobó la *Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México*. No debe causar asombro que la entidad donde se aprobó este recurso fue donde sus habitantes no contaban con derechos políticos locales.

² Fueron tres preguntas las que se sometieron a votación popular mediante la vía plebiscitaria: 1. ¿Está usted de acuerdo con que el Distrito Federal se convierta en un estado de la Federación? (66% a favor), 2. ¿Está usted de acuerdo con que los gobernantes del Distrito Federal sean elegidos por voto universal y secreto? (84.8% a favor), 3. ¿Está usted de acuerdo con que el Distrito Federal cuente con un Poder Legislativo propio? (84.3% a favor). La participación ciudadana fue de 331 mil 180 ciudadanos y ciudadanas.

Después de este ejercicio, comenzaron a implementarse más en el ámbito local. Sin embargo, de acuerdo a Valladares, los datos institucionales reflejan que desde 1995 y hasta inicios del 2020 solo 16 de las 32 entidades habían implementado algún mecanismo, solo ocho estados habían aplicado más de uno; además se detectó que el plebiscito ha sido el ejercicio más recurrente: 17 en todo el país (Valladares, 2021:188).

No obstante, durante el gobierno de la actual administración, se llevaron a cabo cinco consultas ciudadanas no formales, es decir que no se sometieron a la regulación de la ley, pero donde se pretendía ganar legitimidad en tópicos de “interés general” bajo la premisa de *“le vamos a preguntar a los mexicanos”*, así:

- i. En octubre de 2018 se planteó una consulta popular sobre el nuevo aeropuerto de la ciudad de México. En ella se preguntaba sobre si continuar con las obras del mismo en Texcoco o bien implementar un nuevo proyecto en Santa Lucía.
- ii. En marzo de 2019 el gobierno federal consultó a los pueblos originarios de Oaxaca y Veracruz sobre la obra del Istmo de Tehuantepec.
- iii. Durante junio y julio de 2019, a lo largo de 20 días se preguntó sobre la construcción
- iv. de la refinería en Dos Bocas a través de la agencia de seguridad, energía y ambiente que depende de la SEMARNAT.
- v. El 14 y 15 de diciembre de 2019 la Secretaría de Gobernación (SEGOB) organizó la consulta para la población de Quintana Roo, Tabasco, Campeche, Chiapas y Yucatán para saber si estaban de acuerdo o no con la construcción del Tren Maya.
- vi. Para el 21 y 22 de marzo de 2020, el gobierno federal, también a través de la SEGOB impulsó la consulta sobre el proyecto cervecero de la planta *Constellation Brands* en el municipio de Mexicali en Baja California.

A pesar de estas experiencias, López Obrador sería eje vertebral de dos grandes mecanismos de participación ciudadana que en esta ocasión sí serían regulados por la ley: la consulta popular para comenzar una investigación a los ex presidentes de México (de 1988 a 2018) y la revocación de mandato. Ambos ejercicios polémicos en su fundamentación, implementación y resultados. La razón: ambos propuestos e impulsados por el propio ejecutivo.

3. Revocación de mandato. Un acercamiento al modelo de comunicación política.

Al es que al ser una acción social, la actividad política no puede pensarse sin el ejercicio de la comunicación, razón por la cual, en los estudios sobre comunicación política se puede encontrar que durante la década de los 70 y 80 esta línea de investigación se concentró en el análisis del comportamiento electoral de los ciudadanos y ciudadanas y en análisis del discurso.

Por ello cuando se refiere a comunicación política, una de las tesis más sobresalientes provenientes desde la corriente de la democracia liberal es la del autor Jean Marie Cotteret que la define como *el intercambio de información entre los gobernantes y los gobernados a través de los canales de transmisión estructurados o informales* (Cotteret, 1977). Esta propuesta por un lado reconoce a los individuos que cargados de derechos civiles y políticos se vuelven agentes ciudadanos, mismos que al ejercer su libertad de pensamiento, de expresión, de información, se vuelven aptos para la toma de decisiones de la vida pública.

De esta manera a continuación se presenta un informe y análisis del modelo de comunicación política implementado en el primer ejercicio de revocación de mandato que quedo a cargo del Instituto Nacional Electoral.

3.1 El sustento jurídico

El mecanismo de revocación de mandato llegó a México a través de la Ley Federal de Revocación de Mandato en septiembre de 2021. Aunque su publicación comenzó una polémica discusión sobre los intereses políticos detrás de ella, habrá que precisar que sí existen indicios de intenciones ciudadanas sobre la existencia de esta herramienta de democracia directa.

Por ejemplo, la primera vez que el país considero hacer uso de este recurso fue en 2008 durante el sexenio de Felipe Calderón, que tras haber implementado una política contra el narcotráfico, el resultado derivó en una ola de violencia a lo largo de todo el país. Después, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto; de hecho, la académica Viridiana Ríos encontró que de haber podido utilizar este mecanismo dos años antes de que concluyera el sexenio, México se pudo haber ahorrado 61 mil millones de pesos que se dilapidaron en corrupción de acuerdo a la Auditoría Superior de la Federación.

En ambos casos, la ciudadanía no contaba con el instrumento para poder llevarlo a cabo. Esto fue aprovechado por López Obrador cuando propuso someterse a una revocación de mandato durante su campaña presidencial. De ahí, que la iniciativa ciudadana presentó serios cuestionamientos sobre la verdadera intención del mecanismo. ¿Era realmente una petición ciudadana o habría sido la ingeniería presidencial la que la hizo realidad?

Sin más, la Ley Federal de Revocación de Mandato fue publicada en septiembre de 2021 con fundamento en el artículo 35 fracción IX de la CPEUM, en ella se establecían las reglas de juego con las que se llevaría a cabo este ejercicio, entre ellas destacan:

- Solo la ciudadanía la podrá solicitar a través de una intención ante el INE.
- La recabación de firmas necesarias será del equivalente al 3% de las personas inscritas a la Lista Nominal de Electores (LNE) en por lo menos 17 entidades federativas.
- El INE será la institución encargada de organizar los procesos de revocación y de llevar a cabo la promoción del voto.
- La difusión de la revocación comenzará al día siguiente de la publicación de la convocatoria y hasta tres días antes del ejercicio.
- La revocación procederá sólo si hay mayoría absoluta. Y será vinculante cuando se cuente con al menos 40% de la participación ciudadana.

De esta manera, con la publicación de la Ley Federal de Revocación de Mandato las mexicanas y los mexicanos tienen la posibilidad real de destituir al ejecutivo por pérdida de confianza. Esta herramienta constitucional es hoy es una realidad.

3.2 Sobre el modelo de comunicación política

De acuerdo a la propia ley federal, no solo la organización sino la promoción del voto (art. 27) y la difusión del ejercicio están a cargo del INE (Sección tercera de la ley: del artículo 32 al 35). De modo que la difusión de la revocación de mandato 2021-2022 comenzó el día siguiente de la publicación de la convocatoria y hasta los tres días previos al día de la jornada, es decir del día cinco de febrero y hasta el seis de abril de 2022.

La estrategia de comunicación política implementada por la autoridad electoral para difundir la revocación consistió en:

Cuadro 1. Acciones y alcances de difusión de la Revocación de Mandato realizada por el INE

<i>Acciones de difusión</i>	<i>Impacto de las acciones de difusión</i>	
Entrevistas	874 al funcionamiento del INE en todo el país.	
Radio y televisión	1, 095, 987 spots	A través de 3, 538 emisoras
Foros de Discusión	282	243 foros distritales 36 foros estatales 3 foros nacionales
Boletín	769 a través de https://centralector.ine.mx/al-dia/	
Espacios externos	68, 683	
Periódicos y revistas	7, 291, 180 ejemplares en:	16 periódicos 1 revista
Medios Digitales	Páginas	579,178 Micrositio 21,561 conversaciones en el chatbot 140 inserciones en espacios digitales
	Redes sociales	1, 008 publicaciones en cuenta oficial @INEMéxico 879 publicaciones de Consejeros y Consejeras. 34,795 publicaciones de las juntas locales del INE. 3,038 publicaciones de los OPL

Fuente: INE

Algunas consideraciones sobre los spots distribuidos en radio y televisión es que se realizaron y difundieron 11 diferentes anuncios (uno de ellos fue doblado a 5 lenguas indígenas) con apego a la normatividad de la ley federal de revocación de mandato; es decir con información objetiva, imparcial y con fines informativos. Mismos que a través del periodo de difusión se tradujeron en más de mil transmisiones en total (1 millón 095 mil 987 spots).

En el diagrama 1 se muestran dos ejemplos de la batería de spots difundidos por el INE. En cada uno de ellos, es posible observar que el mensaje transmitido es claro y sencillo, se anuncia que la revocación de mandato es un derecho ciudadano estipulado en la ley e invita a la población a participar; cada uno con la finalidad de informar las formas de intervención en la revocación de mandato. El mensaje se transmite de manera auditiva, escrita y en lenguaje de señas.

Además en cada uno de los anuncios es posible observar la participación de un hombre y una mujer que portan los colores de la institución electoral de manera tenue y mantienen una intervención equitativa en el discurso. Además el fondo en los que se transmite cada uno va relacionado con la temática a tratar, pero siempre manteniendo referencias socioculturales. Un detalle importante es que sólo en uno de los once spots se

menciona el nombre de Andrés Manuel López Obrador: en el concerniente al contenido de la boleta electoral; en los demás casos se hace referencia al “ejecutivo” o “presidente de la república”.

En ese sentido, habrá que mencionar que en este último dato, la autoridad electoral claramente optó por generar una difusión neutral en la que consideró el peso simbólico del nombre “Andrés Manuel López Obrador”. Es decir, evitando una referencia directa a quien era objeto de la revocación misma.

Diagrama 1. Spots difundidos en radio y televisión para la revocación de mandato 2022.



Fuente: INETV, Canal de YouTube.

En el caso de la organización de foros de discusión, hay que señalar que se llevaron a cabo a lo largo de todo el país en lo que parece un intento de sincronía electoral; es decir cada junta local del INE realizó un foro estatal (algunos más de uno, 36 foros frente a 32 entidades), mientras que a nivel distrital solo se generaron 243 foros en 300 distritos electorales y tres foros nacionales. De estos, ninguno fue transmitido en medios tradicionales, sino que la autoridad electoral en apego al artículo 35 de la ley federal, los difundió vía plataformas digitales.

Un detalle de las transmisiones de los foros es que solamente los 3 nacionales se transmitieron en el canal oficial del INE (YouTube), los 279 restantes se divulgaron a través de las redes sociales de cada junta (Facebook). Es decir, la cifra de 279 ejercicios de discusión suena ostentoso, pero en realidad cada uno logró impactar a una población muy delimitada pues su alcance está limitado por el número de personas que cuentan con acceso a internet, que cuentan con alguna red social y que den seguimiento a las páginas institucionales.

Otro detalle no menor sobre los foros fue que de acuerdo a la ley federal en su artículo 35, *el Instituto deberá organizar al menos dos foros de discusión (...) donde prevalecerá la equidad entre las participaciones a favor y en contra*. Y es que si bien, en los foros nacionales sí se cumplió con el objetivo y con ello, la norma, la dinámica en los ejercicios estatales y distritales se difuminó. En estos dos últimos la discusión se centró no en las posturas a favor y en contra de la revocación sino en un posicionamiento institucional de por qué la ciudadanía sí tendría que participar en la consulta sobre revocación de mandato. La mayoría de los foros estatales y distritales fueron más un espacio de difusión del mecanismo, pero no un debate colectivo como propone originalmente la ley.

Entonces, vislumbrando algunas de las acciones de comunicación política implementadas por el INE fue posible observar que éste aunque atendió en todo momento a la ley, presenta espacios de oportunidad que permitan mejorar este mecanismo de participación ciudadana.

Por otro lado, quienes quedaron fuera del modelo de comunicación política fueron los partidos políticos. Y es que aunque la ley menciona que: *los partidos políticos podrán promover la participación ciudadana en el proceso de revocación de mandato* (LFRM, art.32); sin embargo, menciona que: *los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, sólo podrán difundir las campañas de información relativas a los servicios educativos y de salud o las necesarias para la protección civil*.

En tanto, diversos actores políticos de distintos órdenes de gobierno se posicionaron de manera pública y reiterada en el marco de la lucha por la aprobación de la reforma eléctrica. Es decir, aprovecharon la coyuntura de la discusión del tema eléctrico para “recordarle” a la ciudadanía los embates que el gobierno de la Cuarta Transformación enfrentaba. Algunos casos emblemáticos fueron:

Caso 1. Mario Delgado en mitin de reforma eléctrica”.

Emisor: Mario Delgado, presidente nacional de MORENA.	Medio de transmisión: Mitin (a favor de la reforma eléctrica).
Mensaje: <i>“Este domingo el pueblo de México se alzaré en urnas y encabezará una revolución pacífica contra la dictadura del INE. Vamos a ratificar a nuestro presidente”.</i>	
Contexto: El 6 de abril de 2022, cuatro días antes de la consulta de revocación de mandato, MORENA realizó un mitin en la plancha del Monumento de la Revolución convocado para defender la reforma eléctrica. En este espacio, el dirigente morenista aseguró que el último reducto del neoliberalismo en México se encuentra en el INE.	

Fuente: (Suárez, 2022).

Caso 2. Claudia Sheinbaum en mitin de la reforma eléctrica.

Emisor: Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno de la CDMX.	Medio de transmisión: Mitin (a favor de la reforma eléctrica).
Mensaje: [En referencia al INE] “No tienen autoridad moral. En el fondo odian la participación del pueblo”. En adelante Sheinbaum llama a acudir a las urnas el día domingo para respaldar a López Obrador, convoca con el grito: “No estás solo”.	
Contexto: El 6 de abril de 2022, cuatro días antes de la consulta de revocación de mandato, MORENA realizó un mitin en la plancha del Monumento de la Revolución convocado para defender la reforma eléctrica. Aunque Claudia Sheinbaum pidió licencia para asistir como ciudadana, tomó la tribuna para enviar dos mensajes: unos sobre el papel de la autoridad electoral y otro para invitar a la ciudadanía a votar en la revocación de mandato y apoyar al ejecutivo.	

Fuente: (Suárez, 2022).

Caso 3. Personas gobernantes de MORENA muestran apoyo a AMLO.

Emisor: 18 gobernadores y gobernadoras de MORENA.	Medio de transmisión: Desplejado difundido por Redes sociales vía Twitter.
Mensaje: <i>“Los gobernadores, gobernadoras y jefa de Gobierno que provenimos del movimiento de transformación manifestamos nuestro respaldo al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Sabemos que los ataques tienen su origen en grupos económicos que perdieron privilegios y que se oponen a una reforma eléctrica que beneficie a la Nación y al pueblo de México”.</i>	
Contexto: El 14 de febrero de 2022, se emitió un comunicado coordinado por 17 gobernadores y gobernadoras y la Jefa de Gobierno de la CDMX para mostrar apoyo a AMLO en tanto el trabajo y defensa que éste ha hecho por México, en el contexto de la lucha por la aprobación de la reforma eléctrica.	

Fuente: (Animal Político, 2022).

Los casos anteriores fueron claros posicionamientos de actores políticos que pese a la normatividad, optaron por difundir y promover la participación ciudadana en la consulta sobre revocación de mandato a partir de las políticas generadas por el actual presidente; donde el mensaje directo buscaba influir en el sentido del voto popular. Ante ello, el INE a través de la Comisión de Quejas y Denuncias declaró procedentes las medidas cautelares respecto a propaganda gubernamental, acciones que MORENA impugnó y con ello llevó el caso a manos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Así, el Tribunal también se posicionó y distinguió entre “comunicación gubernamental” y “propaganda gubernamental” de la que mencionó:

“La comunicación gubernamental es un género muy amplio y no está exento de debates respecto de qué es y qué no es, pues incluye muchas, y diversas modalidades. Mientras que, la propaganda gubernamental es una especie o modalidad de comunicación más concreta. **Aunque toda propaganda gubernamental es comunicación gubernamental, no toda comunicación gubernamental es propaganda gubernamental.** Por tanto, comunicación y propaganda gubernamental son género y especie, respectivamente, y no sinónimos de lo mismo.

[Así] la sentencia deja en claro desde los primeros estudios que, cualquier forma de comunicación gubernamental se encuentra sujeta a las directrices y prohibiciones constitucionales y legales; sin embargo, la tesis que se sostiene es que se **será en cada caso concreto en el que las autoridades electorales estén en posibilidad de valorar la licitud de las manifestaciones de las y los funcionarios públicos que, en su caso, sean denunciadas e investigadas.** (Sentencia SUP-REP-139/2019).

De modo que a partir de la sentencia SUP-REP-139/2019 se declaró que lo estipulado en la ley federal de revocación de mandato no implica el silencio absoluto de las y los gobernantes pues tienen derecho a participar en la vida política del país, sino que significa no abusar del cargo que ostentan promocionando los logros del gobierno porque ello genera inequidad en la contienda.

El siguiente paso de MORENA consistió en apelar legislativamente por una “interpretación auténtica de la ley” de los artículos 11 y 12 de la LFRM a través del Dip. Sergio Gutierrez Luna, donde se promovía que los diferentes actores políticos pudieran promocionar la revocación no como funcionarios, ni representantes sino como ciudadanos y ciudadanas. De modo que el caso llegó a manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y en tanto la Corte se posicionara en contra de MORENA, diversos personas gobernantes aprovecharon para continuar con la promoción de la consulta de revocación en un sentido de favorecer al ejecutivo.

Conclusión: ¿participación ciudadana o electoral?

La consulta sobre revocación de mandato llevada a cabo el 10 de abril de 2022 resultó ser un ejercicio polémico por la naturaleza y los intereses políticos inmiscuidos en ella. Así como se planteaba en el apartado uno de este escrito, estos mecanismos de participación ciudadana pueden mantener un interés detrás del “ciudadano”, esta primera aplicación del ejercicio fue ejemplo de ello.

Al respecto, se ponen a consideración dos grandes conclusiones del proceso de revocación de mandato: el primero tiene que ver con darle valía a la participación ciudadana y el segundo refiere a los grandes retos y áreas de oportunidad que las instituciones electorales, partidarias y la ciudadanía tienen.

Sobre el primero, parece de suma importancia retomar y no demeritar la participación ciudadana que se hizo presente en este ejercicio a través de la recabación de firmas para poder iniciar con este ejercicio. En líneas anteriores se hizo alusión a la forma en la que la ciudadanía se ha ido apropiando poco a poco de las herramientas legales que le permitan tener mayor control sobre sus representantes: la primera intención de revocación de mandato no tuvo que ver con la presencia de López Obrador sino de una mala gestión presidencial; la primera intención de consulta para enjuiciar a un ex presidente fue en 1995 para someter a investigación a Carlos Salinas de Gortari.

En este ejercicio, si bien no se puede pasar por alto, que someterse a una revocación de mandato fue una promesa de campaña del actual presidente, no se puede reducir el involucramiento ciudadano a un actor político. Ello implicaría negar la capacidad crítica de los y las ciudadanas que con intenciones legítimas participaron en la recabación de firmas. En ese sentido, parece preocupante que la autoridad electoral no haya concluido la revisión de todas las firmas registradas por recortes presupuestarios, pues la “austeridad republicana” no debe confundirse con un austericidio porque al haber sido esta una iniciativa ciudadana, al esencia democrática se trasgrede por recortes presupuestales.

Para finalizar con esta primera inquietud, mencionar que si bien este ejercicio tuvo un empuje presidencial, no se debe satanizar por ello. Yanina Welp, una especialista en estos temas de participación ciudadana apunta sobre ellos que ni los intereses políticos, ni el origen

demeritan el avance democrático que significan para la ciudadanía. No obstante, tampoco son cuestiones que hay que dejar en el vacío.

La segunda conclusión que se presenta tiene que ver con los retos y áreas de oportunidad que tiene el Estado en conjunto. Los partidos políticos tanto de MORENA como los de la oposición difundieron intereses particulares bajo el velo democrático; en ellos hubo una especie de “acarreo” discursivo.

La oposición del gobierno actual deberá replantearse las estrategias a seguir porque en este caso en particular, el llamado a no votar, a desprestigiar el mecanismo o a realizar un “abstencionismo activo”, solo restringió la posibilidad de que la ciudadanía no participara en un ejercicio inédito. MORENA de manera similar deberá considerar los costos políticos que implica mantener el discurso de “ellos y nosotros” porque tarde o temprano esa acusación que apela a la polémica y a lo emocional tendrá costos electorales.

El INE tuvo un papel cuesta arriba en este proceso, entre la negación de ampliación de presupuesto y las descalificaciones por parte de MORENA y el ejecutivo, sobresale la ingeniería institucional que logró desplegar el instituto; sin duda es resultado de la consolidación y experiencia que ha logrado a lo largo de los años. Lo anterior, no omite que la autoridad electoral no deba mejorar actividades y rubros: el caso de los foros de discusión resulta sumamente preocupante pues una de las funciones del instituto de acuerdo a la Ley General de Revocación de Mandato era el de llevar a la ciudadanía un debate informado; meta que se logró muy modestamente.

Por otro lado, el apostar por realizar la mayor parte de difusión por medio de redes sociales resulta ambiguo. Y es que si bien, fue la estrategia que el Instituto determinó ante la falta de presupuesto, los alcances de la sociedad red aún no logran impactar en la vida diaria de la mayoría de mexicanos y mexicanas.

Finalmente, este artículo concluye que a partir de los posicionamientos de los actores políticos y las instituciones involucradas, el modelo de comunicación política del INE tendrá que realizar cambios contundentes para fortalecer el ADN democrático de la sociedad. Este ejercicio de revocación de mandato que alcanzó una participación del 17.77% es resultado de que en México los partidos e instituciones construyen electores y no ciudadanía. Esto habla de la necesidad de adoptar nuevos hábitos democráticos, entonces bienvenidos los mecanismos de participación ciudadana.

Bibliografía

- Alarcón, Víctor (2014) “Vías no partidistas de participación política”. En Alarcón, V. y Palma, E. *Instituciones, participación y representación políticas en México (coords.)*. México: Tirant Lo Blanch / UAM Iztapalapa. Pp: 209-251.
- Baño, Rodrigo (1998) “Participación ciudadana: elementos conceptuales”. En Correa, E. y Noé, M. *Nociones de una ciudadanía que crece*. Chile: FLAC.SO. Pp: 15-37
- Bobbio, Norberto (1985) *El futuro de la democracia*. México: Plaza y Janés.
- Carrillo, E. (2021) “Morena intensifica campaña para el “sí” en consulta contra ex presidentes”. En *Forbes México*. A través de: <https://www.forbes.com.mx/morena-campana-si-consulta-expresidentes/>
- Castillo, Daniela y Carrera, J. Antonio (2020) “Sensacionalismo mediático: la interacción entre partidos y electores 2018”. En *DOXA Digital*. Vol. 10, núm. 18. A través de: <https://journals.sfu.ca/doxa/index.php/doxa/article/view/18CP1/91>
- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a través de: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_201219.pdf
- Dahl, Robert (2007) “La poliarquía”. En *Diez textos básicos de ciencia política*. España: Ariel.
- Damián, Fernando (2020) “Consulta sobre juicio a ex presidentes es “una comedia””. En *Milenio*. A través de: <https://www.milenio.com/politica/una-comedia-la-consulta-sobre-juicio-a-ex-presidentes-pan>

- Favela, Alejandro (2007) “Ciudadanos y Derechos Humanos”. En *Tratado de Ciencia Política*. México: Anthropos / UAMI.
- Habermass, Jürgen (2000) *Factibilidad y validez*. España: Trotta.
- Ley Federal de Revocación de Mandato (2022) A través de: <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFRM.pdf>
- Monroy, Jorge (2021) “INE: consulta no es sobre juicio a expresidentes”. En *El Economista*. A través de: <https://www.eleconomista.com.mx/politica/El-INE-no-engana-la-consulta-popular-no-sera-para-juzgar-directamente-a-expresidentes-Lorenzo-Cordova-20210729-0123.html>
- Redacción Animal Político (2022) “Gobernadores de Morena respaldan a AMLO y reforma eléctrica; él les agradece apoyo”. En *Animal Político*. A través de: <https://www.animalpolitico.com/2022/02/jefa-gobierno-gobernadores-morena-defensa-amlo-reforma-electrica/>
- Shumpetter, Joseph (1983) *Capitalismo, socialismo y democracia*. España: Orbis,
- Suárez, Karina (2022) “Sheinbaum carga contra el INE en vísperas del revocatorio: “Odan la participación del pueblo””. En *El País*. A través de: <https://elpais.com/mexico/2022-04-07/sheinbaum-carga-contra-el-ine-en-visperas-del-revocatorio-odian-la-participacion-del-pueblo.html>
- Tamayo, Sergio (2010) *Crítica de la ciudadanía*. México: Siglo XXI Editores – UAM-A.
- TEPJF (2019) Recursos de revisión del procedimiento especial sancionador, sentencia SUP-REP-139/2019. A través de: https://www.te.gob.mx/Informacion_judicial/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-REP-0139-2019.pdf
- Valladares, Jorge (2021) “Libro Blanco de los mecanismos de participación ciudadana en México”. En Pérez, M. *Mecanismos de participación ciudadana en México: problemas, avances y aprendizajes*. México: CEE Nuevo León / NODOS divulgación. Pp. 159-200.
- Welp, Yanina (2016) “La participación ciudadana como compromiso democrático”. En *Revista Mexicana de Derecho Electoral*, núm. 10, julio-diciembre 2016. México: UNAM-IIIJ, pp: 97-121.

